

NI ES EL MOMENTO, NI ESTA ES LA FORMA PARA RETOMAR EL TEMA LIMÍTROFE ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA

Si hay algo respetan los gobiernos responsables, son los temas considerados de Estado; entre ellos, desde luego, los relativos a sus fronteras. Por eso, las controversias territoriales no deben convertirse en un tema de debate electoral, ya que es alto el riesgo de que termine perdiendo toda la nación.

En el caso de Venezuela y Colombia, el diferendo territorial ha sido un tema de largas y delicadas discusiones, no exentas de momentos de tensión y aprovechamiento político. Ambas naciones, no solo compartimos una historia común desde nuestro nacimiento como repúblicas, en nuestro desarrollo económico y social y en nuestras luchas hacia la democracia. Compartimos la que fue la frontera más activa de la región con intercambios superiores a 7.500 millones de dólares por año, hoy lamentablemente en manos del contrabando y la ilicitud. Sumado a ello, en nuestro país viven más de 5 millones de ciudadanos que son colombo-venezolanos. Además, hemos entendido, de un lado y otro de nuestra frontera, que no habrá paz duradera en Colombia hasta que en Venezuela no conquistemos la democracia y se establezca un gobierno que combata frontalmente las actividades delictivas del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo en nuestro territorio.

La creación de la Comisión Negociadora (CONEG) y de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF) en 1990 significó, por una parte, destrabar las conversaciones, dejando en manos de los expertos las negociaciones sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas al norte de Castilletes y, por la otra, cada nación tuvo la oportunidad de defender sus legítimas aspiraciones, explorando diversas hipótesis de negociación que nos permitieron avanzar hacia fórmulas de entendimiento y convivencia. Este mecanismo eficiente ha sido abandonado desde 2009, fecha en que Hugo Chávez cambió a los integrantes en Venezuela. Desde entonces sus comisionados no se reúnen.

Hoy Venezuela y Colombia viven conflictos internos: Colombia, inmersa en la discusión sobre los acuerdos de paz; y Venezuela, ante la inminencia de una crisis humanitaria y una sociedad tratando de defenderse de un régimen represivo y opresor. Desde luego, estas no son las condiciones para retomar unas discusiones, que son necesarias y que revisten enorme importancia para ambos países.

En estas horas en que el régimen ha puesto en riesgo los intereses permanentes, que como nación hemos defendido, reitero que los venezolanos no renunciaremos a los legítimos derechos de Venezuela, en ninguna de sus controversias territoriales. Por lo tanto, demandamos del gobierno evitar la internacionalización de las controversias, actuar conforme al Derecho Internacional Público y retomar las discusiones en el marco de la CONEG, en defensa de la soberanía e integridad de nuestro territorio. Una resolución estable que ponga fin a los diferendos pendientes no puede ser producto de improvisaciones, decretos o cálculos políticos de una parcialidad dentro del país. Ello sería una irresponsabilidad histórica de consecuencias imprevisibles.

Si hay un objetivo oscuro detrás de una acción para dividir y enfrentar a nuestros pueblos, los demócratas no podemos permitirlo. Los venezolanos sabemos que los colombianos nos acompañan en nuestra lucha por la democracia y la libertad. Y los colombianos saben que los venezolanos sentimos propio el anhelo por la justicia y la paz en Colombia.

MARÍA CORINA MACHADO